

*LA ENAJENACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO EN BOGOTÁ,  
COLOMBIA (1948-1991)*<sup>1</sup>

*THE ALIENATION OF THE ARMED CONFLICT IN BOGOTÁ,  
COLOMBIA (1948-1991)*

Carlos Andrés Escobar Moyano\*

Tipo de documento: artículo académico

Fecha de ingreso: 15/11/2024 • Fecha de aceptación: 18/12/2025

RESUMEN

Este artículo analiza la relación entre urbanización y conflicto armado en Bogotá (1948-1991) desde una perspectiva histórico-crítica. Sostiene que la ciudad fue un actor constitutivo del conflicto y no un escenario marginal: la violencia operó como mediación estructural en la producción del espacio urbano. Se cuestiona la enajenación analítica de lo urbano en las narrativas dominantes —que redujeron la guerra a lo rural— y se propone la categoría de “espacialización de la violencia” para explicar fronteras internas, segregación y dispositivos de control. Con base en evidencia histórica, se examinan procesos como modernización autoritaria, informalidad barrial, protesta y giro securitario. El estudio concluye que integrar la dimensión urbana es clave para comprender la persistencia del conflicto y diseñar políticas de paz con justicia espacial.

**Palabras clave:** violencia, conflictos armados, personas desplazadas, urbanización, zonas urbanas

ABSTRACT

This article analyzes the relationship between urbanization and armed conflict in Bogotá (1948-1991) through a historical-critical lens. It argues that the city was not a marginal stage but a constitutive actor of the conflict, where violence operated as

---

1 Este documento es resultado de la investigación de carácter doctoral adelantada en la Universidad Nacional Autónoma de México en el posgrado en geografía (UNAM).

\* Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.  
<https://orcid.org/0000-0001-5277-2334>  
[caraescobarmoy@gmail.com](mailto:caraescobarmoy@gmail.com)

a structural mediation in the production of urban space. The study challenges the analytical alienation of the urban dimension in dominant narratives—often limited to rural explanations—and introduces the notion of “spatialization of violence” to explain internal borders, segregation, and coercive governance. Based on historical evidence, it examines authoritarian modernization, informal settlements, popular protest, and the securitarian turn of the State. It concludes that integrating the urban dimension is essential to understanding the persistence of conflict and designing peace policies grounded in spatial justice.

**Keywords:** violence, armed conflicts, displaced persons, urbanization, urban areas

## 1. INTRODUCCIÓN

El proceso de formación urbana en Colombia tiene sus raíces en estructuras de poblamiento precolombinas que articularon valles interandinos, sabanas y planicies de transición hacia la Orinoquía y la Amazonía. La colonización trastocó este ordenamiento ancestral al imponer una red de ciudades funcionales a la extracción de recursos y a la inserción en circuitos globales de comercio (Zambrano y Bernard, 1993). Los enclaves urbanos coloniales no respondieron a dinámicas locales, sino a la racionalidad imperial: se convirtieron en nodos de un sistema extractivista cuya jerarquía dependía de la cercanía a puertos o corredores fluviales, mientras que en las cordilleras la minería estimuló la fundación de centros urbanos en Antioquia y el occidente andino (Vargas, 2007).

Este patrón no solo definió la localización de las ciudades, sino que instauró un dispositivo de dominación espacial. Al reorganizar los territorios indígenas bajo la lógica de la metrópoli, la ciudad se consolidó como instrumento de poder y control. Bogotá, fundada en 1538, encarna esa trayectoria al convertirse en sede administrativa y en mediación entre la explotación territorial y la reproducción del orden colonial (Serje, 2011). La herencia de este modelo explica que las desigualdades regionales y urbanas no sean anomalías recientes, sino componentes estructurales que condicionaron la posterior urbanización.

Durante el siglo XIX, la naciente república reprodujo en gran medida esa matriz extractiva. El auge minero y, sobre todo, la expansión cafetera consolidó economías de

enclave orientadas al mercado mundial (Aprile-Gnisset, 1992). Ciudades como Bogotá incorporaron innovaciones técnicas —electricidad, acueductos, tranvías— que no respondieron a proyectos redistributivos, sino a la necesidad de garantizar conectividad y eficiencia al modelo exportador (Castro-Gómez, 2009). De este modo, la modernización urbana quedó supeditada a intereses privados y a la integración subordinada al capital internacional, profundizando la fragmentación territorial y la dependencia externa. Las primeras décadas del siglo XX consolidaron este patrón urbano-regional: densificación desigual, déficits estructurales en servicios básicos y escasa capacidad de gestión de los gobiernos locales (Montoya, 2018). En ese escenario, la movilización social y diversas formas de violencia se convirtieron en mecanismos de acceso y disputa por la ciudad (Comisión de la Verdad, 2022a). Desde entonces, las urbes colombianas dejaron de ser escenarios marginales para el conflicto y se transformaron en territorios atravesados por confrontaciones políticas y sociales, con impactos directos en la morfología urbana y en la vida cotidiana.

Sobre este trasfondo histórico, el presente artículo analiza el papel desempeñado por Bogotá como mediadora activa en el desarrollo, reproducción y sostenimiento del conflicto armado interno entre 1948 y 1991. La hipótesis que orienta el texto sostiene que la interpretación dominante del conflicto en Colombia ha privilegiado su dimensión rural, invisibilizando las dinámicas urbanas y separando analíticamente a la ciudad del relato central de la guerra. Esta suerte de enajenación conceptual

de lo urbano dentro de la narrativa del conflicto ha ocultado procesos esenciales: por el contrario, Bogotá —a través de sus políticas de planeación, su configuración socioespacial y la presencia diferenciada del Estado— contribuyó de manera decisiva a la prolongación del conflicto armado. Lejos de concebir la violencia urbana como una anomalía o un mero “desborde” de la guerra rural, se plantea que la ciudad fue un escenario constitutivo del conflicto, cuyas dinámicas internas alimentaron la confrontación general tanto como la rural. En las secciones siguientes se exploran los fundamentos teóricos de esta afirmación y se desarrollan sus implicaciones históricas.

## 2. LA ENAJENACIÓN DE LO URBANO: UN LÍMITE ANALÍTICO EN LA COMPRENSIÓN DEL CONFLICTO ARMADO

El estudio del conflicto armado en Colombia ha tendido a privilegiar la ruralidad como teatro principal de la confrontación, relegando las ciudades a un papel secundario. Esta cesura produce una enajenación de lo urbano: separa la ciudad de los procesos históricos y sociales que explican la guerra y conduce a una lectura fragmentaria. Así, mientras el campo se naturaliza como espacio “propio” de la violencia, la ciudad queda asociada a la institucionalidad y al orden.

En la tradición marxista, la enajenación alude al extrañamiento por el cual los productos y relaciones sociales se autonomizan y se imponen como fuerzas externas a sus creadores (Mészáros, 1973). Trasladada al caso colombiano, esta lógica operó en la construcción de narrativas: la violencia se desplazó hacia un “otro” espacial —ruralidades periféricas, zonas de frontera o territorios supuestamente sin Estado— y la ciudad fue abstraída como ámbito exento. Se configuró así una inversión conceptual que atribuyó paz y normalidad a lo urbano, y atraso y violencia al campo, pese a su histórica imbricación.

Las consecuencias fueron analíticas y políticas. En el plano explicativo, se invisibilizaron procesos urbanos que alimentaron

la guerra: desplazamientos forzados hacia la capital, periferización segregada, economías ilegales y violencias asociadas, represión de la protesta y expansión del paramilitarismo en contextos urbanos. En el plano político, esa mirada reducida favoreció estrategias de paz centradas casi exclusivamente en lo rural, bajo el supuesto de que pacificar el campo bastaría para pacificar las ciudades. La persistencia de violencias urbanas —desde ejecuciones extrajudiciales hasta “exterminios sociales”— desmintió ese supuesto y contribuyó a prolongar el conflicto.

Superar esta alienación exige entender la ciudad no como escenario pasivo, sino como actor en la configuración del conflicto. La urbanización desigual, la producción de fronteras internas —entre lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal, lo central y lo periférico— y las estrategias de control estatal desplegadas en Bogotá se entrelazaron con las dinámicas bélicas. Incorporar lo urbano como dimensión constitutiva permite explicar con mayor precisión la duración y metamorfosis de la guerra, al mismo tiempo que orienta políticas de paz que incluyan el espacio ciudadano.

De este modo, superar la enajenación de lo urbano no solo implica reconocer la centralidad de la ciudad en la reproducción del conflicto, sino también dotarse de herramientas analíticas capaces de mostrar cómo esa violencia se materializó en la configuración espacial de Bogotá. En esta investigación, dicha tarea se aborda a través de la categoría de espacialización de la violencia, entendida como un enfoque teórico-metodológico que permite rastrear cómo la violencia opera como mediación estructural en la producción del espacio urbano (Escobar Moyano, 2024). Este giro metodológico posibilita articular la crítica conceptual con la evidencia histórica, al examinar la manera en que las políticas de planeación, la urbanización desigual y las dinámicas de exclusión territorial se entrelazaron con la confrontación armada en la capital durante el periodo 1948-1991.

### 3. ESPACIALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA COMO CLAVE TEÓRICO-METODOLÓGICO<sup>2</sup>

La investigación se inscribe en un enfoque histórico-crítico de carácter cualitativo, enmarcado en la tradición de la geografía crítica. Este campo, heredero de la economía política marxista y de la crítica urbana, plantea que el espacio no constituye un escenario neutro donde se desarrollan los procesos sociales, sino que es, en sí mismo, una producción histórica atravesada por relaciones de poder, acumulación y dominación (Brenner, 2013, 2017; Harvey, 2013; Lefebvre, 2009, 2013; Smith, 2020). Desde esta perspectiva, la violencia no puede entenderse como una anomalía ni como un vacío estatal, sino como una mediación estructural inscrita en la producción del espacio urbano (González, 2013; Schachter, 2015). En consecuencia, Bogotá no se concibe como receptora pasiva de dinámicas nacionales, sino como un espacio en el que la urbanización y la guerra se constituyeron históricamente de manera simultánea y mutuamente constitutiva.

En coherencia con este posicionamiento, la noción de espacialización de la violencia se adoptó tanto como categoría conceptual como dispositivo metodológico. Esta herramienta orientó las distintas fases de la investigación al permitir rastrear cómo la violencia produce y transforma el espacio urbano, y cómo ese mismo espacio condiciona la persistencia y mutación de las violencias. La estrategia metodológica se apoyó en tres dimensiones fundamentales. En primer lugar, la historicidad, que reconoce que todo análisis espacial requiere reconstruir procesos históricos. En segundo lugar, la relacionalidad, que entiende la violencia en interacción con políticas urbanas, dinámicas de acumulación capitalista y resistencias

sociales (Swyngedouw, 1999). Finalmente, la multiescalaridad, que visibiliza la inscripción de la violencia tanto en procesos metropolitanos —como la planeación urbana, la expansión periférica y la construcción de infraestructuras— como en dinámicas barriales, donde emergieron fronteras invisibles, formas de control paraestatal y resistencias comunitarias.

El recorte temporal comprendido entre 1948 y 1991 respondió a un doble criterio. Por un lado, el Bogotazo inauguró un ciclo de violencia urbana y de modernización autoritaria en la planificación de la capital, lo que permitió establecer un punto de inicio de las dinámicas contemporáneas de violencia urbana. Por otro lado, la Constitución de 1991 y la desmovilización de movimientos insurgentes como el Movimiento 19 de abril (M-19) marcaron el cierre de un ciclo y la apertura de una nueva fase asociada al neoliberalismo. Este intervalo resultó adecuado para examinar de manera precisa las formas en que la violencia se inscribió en la transformación urbana de Bogotá durante la segunda mitad del siglo XX.

La unidad de análisis fue la ciudad de Bogotá concebida como ciudad-región, lo que permitió abarcar tanto procesos metropolitanos —tales como la planeación urbana, el crecimiento demográfico y las políticas de seguridad— como dinámicas intraurbanas que se expresaron en sectores específicos donde se concentraron episodios de violencia y resistencia (Escobar, 2021, 2024). Dentro de este nivel de observación, se analizaron barrios populares periféricos, localidades con alta conflictividad social y áreas centrales de relevancia institucional y simbólica, con el fin de mostrar cómo la violencia reconfiguró de manera diferenciada los territorios de la capital.

El trabajo empírico se sustentó en la triangulación de fuentes diversas: archivos históricos y prensa de época; informes oficiales producidos por entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad; testimonios de expertos, líderes comunitarios y exfuncionarios públicos; así como cartografía urbana y bibliografía académica especializada. Las fuentes no fueron concebidas como datos aislados, sino como

2 Para una descripción exhaustiva del diseño metodológico, de las técnicas aplicadas y de la sistematización de fuentes, puede consultarse la tesis doctoral: *La ciudad y la guerra: una geografía crítica de la espacialización de la violencia y el orden urbano en Bogotá (1948–2021)*, actualmente en proceso de publicación en el posgrado en geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

fragmentos de procesos relacionales que muestran cómo la violencia produjo fronteras, reorganizó escalas y habilitó, simultáneamente, prácticas de dominación y de resistencia. Esta estrategia metodológica permitió desentrañar las formas en que Bogotá se constituyó en un escenario privilegiado para comprender la espacialización de la violencia entre 1948 y 1991.

#### 4. DE LA VIOLENCIA BIPARTIDISTA A LA CIUDAD INSURGENTE: BOGOTÁ COMO LABORATORIO DE CONFLICTIVIDAD (1948-1973)

El acelerado proceso de urbanización experimentado en Colombia a mediados del siglo XX transformó radicalmente la configuración social y espacial de sus principales ciudades, incluida Bogotá. Entre 1950 y 1970, el país pasó de ser mayoritariamente rural a urbano: hacia 1970 cerca del 75% de la población ya residía en áreas urbanas (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2007). Este tránsito no obedeció únicamente al auge económico derivado, por ejemplo, del café, sino que estuvo profundamente marcado por el desplazamiento forzado generado por la violencia bipartidista y la búsqueda de mejores condiciones de vida (Montoya, 2018). La confrontación política entre liberales y conservadores expulsó a miles de familias campesinas hacia los centros urbanos, reconfigurando la base social de las ciudades (Torres, 2013). En Bogotá, la llegada masiva de migrantes coincidió con los primeros planes modernistas de gran escala, lo que produjo un choque entre las expectativas estatales de modernización y la materialidad desigual de una ciudad aún en construcción.

La guerra rural, lejos de limitarse a la periferia nacional, se tradujo en dinámicas urbanas que hicieron de la capital un laboratorio de nuevas conflictividades (Comisión de la Verdad, 2022b). La violencia no fue un fenómeno externo que irrumpió en la ciudad, sino una mediación estructural inscrita en la producción del espacio urbano (Schachter, 2015). La informalidad barrial, la autoconstrucción de vivienda y la expansión de cinturones de miseria no fueron simples efectos del éxodo campesino, sino expresiones socioespaciales

de cómo el Estado y el capital gestionaron diferencialmente el acceso a la ciudad (Salazar, 2018). La exclusión del planeamiento formal produjo, por un lado, periferias precarizadas y, por otro, zonas centrales privilegiadas por las inversiones públicas y privadas. Esta tensión constituyó un indicador temprano de la espacialización de la violencia en la capital.

Aunque desde la década de 1920 se había avanzado en la planificación urbana, para mediados del siglo XX los límites de población, equipamientos e infraestructura estaban ya desbordados (Salazar, 2018). La llegada constante de población desplazada obligó a una producción acelerada y desorganizada de recursos básicos, pero fue la autogestión comunitaria la que garantizó la creación de barrios, viviendas y espacios públicos. Escuelas, salones comunales y parques surgieron gracias a la organización vecinal, consolidando lo que algunos autores han denominado la “ciudad hecha a mano” (Murcia et al., 2022; Rico, 2009; Tarchópulos, 2006). Lejos de representar únicamente marginalidad, estas prácticas revelaban un modo específico de gobernar lo urbano, donde la precariedad coexistía con mecanismos estatales selectivos de control (Scott, 2021). La informalidad, en este sentido, no fue ausencia estatal, sino una forma diferenciada de presencia: en el centro se consolidaban proyectos modernistas, mientras que en la periferia predominaban dispositivos coercitivos como puestos de policía o controles administrativos fragmentarios.

La tensión entre la guerra y la ciudad moldeó la nación. A la construcción informal del espacio urbano se sumaron las conflictividades endógenas propias de la urbe: luchas políticas, disputas por el suelo, necesidad de equipamientos básicos y reclamos laborales (Guzmán et al., 2005; Mesa, 1986). Ante la imposibilidad de contener el creciente nivel de violencia, el Estado promovió el Frente Nacional (1958-1974), un pacto bipartidista que buscaba reducir la conflictividad mediante la alternancia en el poder (Barreto, 1986; Zambrano, 2007). Aunque el acuerdo aportó cierta estabilidad macro-política, su carácter

excluyente reforzó el descontento social y sofocó las demandas de sectores urbanos y rurales.

En Bogotá, las tensiones del Frente Nacional se hicieron visibles en huelgas estudiantiles, movilizaciones sindicales y protestas barriales, que convirtieron la ciudad en un microcosmos donde se entrelazaban las contradicciones del proyecto estatal centralista, del capitalismo dependiente y de las resistencias populares emergentes (Archila, 2018). El pacto bipartidista, lejos de representar a la totalidad social, se percibió como un acuerdo entre élites que no respondía a las demandas de las mayorías (De Zubiría, 2018). En consecuencia, amplios sectores urbanos se sintieron marginados de las promesas de paz, justicia social y trabajo digno, lo que propició un escenario de radicalización política.

La llegada masiva de desplazados rurales en los años cincuenta y sesenta transformó la morfología urbana, saturando los servicios básicos y desbordando las previsiones de la planeación estatal (Medina, 1978). La informalidad se consolidó como la principal vía de acceso al suelo y la vivienda (Pulgarín, 1984). Invasiones de predios, tomas de tierras y autoconstrucción colectiva dieron origen a barrios enteros, como La Perseverancia o Los Comuneros, levantados por migrantes campesinos que buscaban reconstruir sus vidas en la capital (Camargo y Hurtado, 2013; Á. Rodríguez, 1986; J. Rodríguez, 1986). Estas prácticas fueron, a la vez, estrategias de supervivencia y formas de resistencia comunitaria frente a la exclusión urbana.

El marco legal también incidió en la consolidación de dinámicas violentas en la ciudad. El Decreto 3398 de 1965, que autorizaba la formación de autodefensas en coordinación con la Fuerza Pública, abrió la puerta a la aparición de experiencias tempranas de paramilitarismo urbano (Franco, 2002, 2009). Lo que en principio se pensó como una herramienta contra la insurgencia rural terminó extendiéndose hacia los centros urbanos, configurando un precedente en la articulación entre actores civiles armados, Estado y dinámicas de control territorial.

En paralelo, las universidades se convirtieron en escenarios centrales de resistencia y politización. El movimiento estudiantil, fortalecido desde la década de 1950, estuvo marcado por hechos de represión letal como la masacre del 8 y 9 de junio de 1954 y el asesinato de Uriel Gutiérrez ese mismo año, durante el gobierno de Rojas Pinilla (Corporación de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria, 2021; Rudas, 2019; Torrejano, 2024). Estos eventos mostraron la disposición del Estado a ejercer violencia directa en entornos urbanos y consolidaron a las universidades como laboratorios de confrontación y protesta (Archila, 2021). Con la creación de la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos (UNEC) en 1957, las movilizaciones estudiantiles se articularon con sindicatos, barrios populares y organizaciones campesinas, generando un entramado de resistencia diverso pero cohesionado.

Inspirados por la Revolución Cubana, muchos jóvenes estudiantes y obreros transitaban hacia la lucha armada, contribuyendo a la fundación de guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o, posteriormente, M-19 (C. Medina, 2020; Villamizar, 2017). Estas insurgencias no surgieron de manera espontánea, sino como resultado de un proceso prolongado de represión estatal, exclusión política y movilización popular en espacios urbanos. Así, la violencia urbana no fue un desborde del conflicto rural, sino una dimensión constitutiva de la modernización desigual del país.

En este escenario, la ciudad adquirió un rol activo en la configuración del conflicto. La espacialización de la violencia se manifestó en al menos tres dimensiones: la periferia como espacio de desplazamiento y autoconstrucción precaria; el centro como escenario de disputa entre la modernización autoritaria y la protesta social; y las instituciones educativas y sindicales como nodos de resistencia y politización (Comisión de la Verdad, 2022a). Bogotá dejó de ser únicamente receptora de migrantes para convertirse en epicentro de la conflictividad nacional.

Durante los años sesenta y setenta, la insurgencia urbana comenzó a consolidarse. Las

guerrillas rurales —como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL)— expandieron sus redes hacia las ciudades, articulándose con organizaciones estudiantiles y obreras (Calvo, 1985; Lara, 2002). Pequeños comandos urbanos organizaron acciones de sabotaje, desde la instalación de explosivos caseros en oficinas públicas hasta protestas simbólicas en espacios estratégicos, con el fin de denunciar la represión estatal y los fraudes electorales (Comisión Histórica FARC-EP, 2015; Villamarín, 2014). Aunque limitadas en lo militar, estas acciones tuvieron un alto impacto simbólico: mostraban que la guerra había dejado de ser un fenómeno circunscrito al campo y atravesaba plenamente la vida metropolitana.

El fraude electoral del 19 de abril de 1970, que llevó a Misael Pastrana a la presidencia en detrimento del general Rojas Pinilla, se convirtió en un punto de quiebre político y social. La sensación de traición catalizó el surgimiento del M-19, guerrilla urbana que combinó repertorios de acción armada con tomas simbólicas del espacio público, y que posicionó a Bogotá como escenario estratégico de confrontación (Lara, 2002; Villamizar, 1995). Este hecho marcó la transición de un ciclo de conflictividad predominantemente campesina hacia otro crecientemente urbano, donde la insurgencia se anclaba en universidades, sindicatos y barrios populares.

En paralelo, los paros cívicos y las huelgas urbanas se consolidaron como repertorios de protesta masiva. Empresas como Avianca, Bavaria y Telecom fueron escenario de huelgas impulsadas por los movimientos obreros, mientras que las tomas de tierras proliferaron en las periferias urbanas de Bogotá, Cali y Medellín (Archila, 1989; López, 1987; Sarmiento y Sánchez, 1985). Estas movilizaciones no solo expresaban demandas económicas inmediatas, sino que cuestionaban abiertamente la legitimidad del pacto bipartidista. La articulación de obreros, estudiantes y comunidades barriales evidenció la emergencia de un tejido insurgente urbano que combinaba luchas

laborales, territoriales y políticas en un mismo escenario.

La respuesta estatal se endureció bajo la influencia de la doctrina de seguridad nacional de la Guerra Fría. Programas como el Plan LASO (1962-1966) y la Alianza para el Progreso (1961) promovieron la militarización de la vida urbana y el control de la disidencia política (Palacios, 2012; Palacios y Safford, 2005). Se consolidó así un “urbanismo de control” que, desde la planificación funcionalista hasta los operativos policiales, buscaba simultáneamente ordenar la ciudad y sofocar las protestas. En Bogotá, las universidades públicas se convirtieron en espacios de excepción, sometidos a la constante intervención de la fuerza pública, mientras que en la periferia el Estado se hacía presente a través de la represión, la estigmatización y, en algunos casos, la cooptación de liderazgos comunitarios.

La década de 1970 fue testigo de un ciclo de paros estudiantiles y huelgas universitarias que reclamaban autonomía, presupuesto y acceso masivo a la educación superior (Archila, 2018). Estas demandas fueron respondidas con violencia, reforzando la percepción de que el espacio académico estaba sometido a un estado de excepción permanente. La convergencia entre estudiantes, obreros y comunidades populares fortaleció un entramado de resistencia urbana que dio legitimidad social a las insurgencias emergentes (De Zubiría, 2018). En este contexto, Bogotá se convirtió en un auténtico laboratorio de violencia, donde confluyeron las tensiones entre un modelo estatal centralista, un capitalismo dependiente y unas resistencias sociales sin cauces institucionales.

Hacia 1973, la relación entre ciudad y violencia alcanzó un punto de inflexión. Tres décadas de migración forzada, urbanización acelerada y confrontación política habían configurado una ciudad fragmentada, con periferias precarias levantadas por autoconstrucción y un centro modernizado mediante grandes proyectos urbanísticos (Valenzuela y Vernez, 1974). Los barrios populares, a la vez espacios de creatividad comunitaria y de resistencia, quedaron también atravesados por

la desconfianza, la represión policial y la presencia incipiente de actores armados (Janssen, 1984). La violencia se había inscrito en la vida cotidiana urbana, transformando el acceso a la vivienda, los patrones de movilidad y las formas de organización social.

La paradoja del Frente Nacional radicó en que, mientras proclamaba estabilidad institucional, imponía un modelo de gobernanza autoritaria en las ciudades. La presencia estatal no fue homogénea ni ausente, sino diferenciada: en el centro de Bogotá se proyectaba una imagen de progreso mediante planes modernistas y obras monumentales, mientras que en las periferias el Estado se hacía sentir sobre todo a través de la represión, la precariedad y el control policial (Archila, 1995; Sarmiento y Sánchez, 1985). Este orden urbano desigual se consolidó como una característica estructural que marcaría las décadas siguientes.

El clima de Guerra Fría reforzó estas dinámicas. La influencia de los Estados Unidos, a través de programas de asistencia como la Alianza para el Progreso, incentivó un modelo que combinaba desarrollo económico selectivo con represión militar (Palacios, 2003). Bogotá se convirtió en un espacio estratégico no solo por su peso demográfico y económico, sino también por su centralidad en la disputa ideológica de la época. La ciudad fue escenario de experimentos tempranos de gubernamentalidad securitaria, donde la planificación urbana se entrelazó con la militarización del orden social (Hernández, 2004; Tarchópulos, 2010).

El ciclo de protestas de finales de los sesenta y comienzos de los setenta evidenció los límites del pacto bipartidista. Si bien, el Frente Nacional proporcionó avances en educación y salud, su carácter excluyente bloqueó la participación política de amplios sectores, profundizando la frustración social. Esta exclusión, sumada a la represión, legitimó la acción de las insurgencias urbanas y condujo a la radicalización de los movimientos estudiantiles, sindicales y barriales (Archila, 1994; Comisión de la Verdad, 2022a). Los paros cívicos y las huelgas, que combinaban demandas laborales con reclamos territoriales, mostraron que la violencia urbana no era un mero desbordamiento del

conflicto rural, sino un componente constitutivo de la urbanización desigual.

De esta manera, hacia 1973, Bogotá se consolidó como un epicentro de la conflictividad nacional. La ciudad ya no podía entenderse como un escenario marginal frente a la guerra, sino como un actor activo en su configuración (Alape, 1980; Delgado, 1978). El desplazamiento forzado alimentó la expansión de barrios autoconstruidos, mientras la planeación modernista, incapaz de absorber el crecimiento demográfico, terminó coexistiendo con una periferia precarizada. Esta dualidad configuró un paisaje urbano fragmentado: modernidad y monumentalidad en el centro, marginalidad y control en la periferia.

En suma, entre 1948 y 1973, Bogotá pasó de ser una capital marcada por el Bogotazo y la violencia bipartidista a consolidarse como un laboratorio urbano de la guerra interna. La interacción entre desplazamiento, autoconstrucción popular, insurgencia estudiantil y represión estatal produjo huellas indelebles en la morfología y en el tejido social de la ciudad. Estos procesos entrelazaron de manera inseparable violencia y urbanización, sentando las bases de los ciclos posteriores de securitización estatal, violencia urbana organizada y resistencias colectivas.

Bogotá, lejos de ser una mera receptora de los efectos del conflicto, se transformó en uno de sus principales escenarios y protagonistas. La capital condensó las tensiones del modelo de desarrollo centralista y dependiente, al tiempo que incubó nuevas formas de violencia y de organización social. Así, comprender el conflicto armado colombiano exige reconocer el papel constitutivo de la ciudad en su reproducción y metamorfosis.

##### 5. DE LA PROTESTA CÍVICA AL URBANISMO CONTRAINSURGENTE: LA CIUDAD BAJO LA GUERRA (1977-1991)

Desde mediados de la década de 1970, la guerra en Colombia comenzó a adquirir una dimensión urbana que transformó radicalmente la configuración de la violencia y la relación entre el Estado, la insurgencia y la sociedad civil. Aunque la confrontación se

había desarrollado principalmente en ámbitos rurales, ya en 1971, las FARC-EP habían planteado la necesidad de trasladar la lucha militar y social a las ciudades, consideradas bastiones del poder político y económico de la élite nacional (Comisión Histórica FARC-EP, 2015). La emergencia del M-19 a comienzos de la década de 1970 marcó un punto de inflexión. Jaime Bateman Cayón, formado en las FARC-EP y, posteriormente, distanciado de la línea del Partido Comunista Colombiano, defendió la idea de “urbanizar la revolución” y llevar la confrontación a ciudades como Bogotá y Cali (Pizarro, 2011, 2020). Tras su expulsión en 1972, junto con otros militantes disidentes, se fundó el M-19, que reivindicó la ciudad como escenario privilegiado de la lucha armada.

De manera paralela, otras organizaciones comenzaron a desplazar sus estructuras hacia los centros urbanos. En 1975, el destacamento urbano Pedro León Arboleda del EPL se escindió para operar exclusivamente en ciudades, realizando expropiaciones, acciones armadas y propaganda política (Restrepo, 1986). Poco después, la Autodefensa Obrera (ADO) irrumpió en la escena urbana con acciones radicales como la toma del Ministerio de Trabajo en 1978 (Agudelo et al., 2015). La proliferación de estas organizaciones insurgentes diversificó las dinámicas de la confrontación: en las ciudades coexistían proyectos de inspiración marxista-leninista, propuestas nacional-populares y estrategias de sabotaje, configurando una ecología política heterogénea y fragmentada que convirtió a la ciudad en un campo de experimentación político-militar.

El escenario se complejizó aún más con el “Febrerazo” de 1977, una ofensiva militar que debilitó al ELN en Bogotá y otras ciudades mediante capturas y asesinatos selectivos (Observatorio de Paz y Conflicto, 2016). Aunque la operación fracturó la presencia urbana del ELN, también abrió vacíos de poder en barrios populares, posteriormente aprovechados por bandas criminales y embriones paramilitares. Ese mismo año, el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre representó otro hito fundamental. Convocado por sindicatos, movimientos estudiantiles, organizaciones barriales

y sectores populares, este paro masivo fue la mayor protesta social desde el Bogotazo de 1948 (Carrillo, 1981; Delgado, 1978; Fonseca, 1982; R. Sánchez, 2009). Bogotá fue su epicentro: localidades como Kennedy, Fontibón y Ciudad Bolívar se convirtieron en escenarios de resistencia, con barricadas, bloqueos de vías y enfrentamientos directos con la fuerza pública. El saldo fue de al menos 25 muertos y alrededor de 3000 detenidos.

El paro puso de relieve tanto la fuerza de la movilización urbana como la radicalización de la respuesta estatal. Mientras las guerrillas lo interpretaron como la evidencia de que las condiciones para una revolución urbana estaban maduras, los organismos de inteligencia y el gobierno lo consideraron prueba de una articulación entre protesta social e insurgencia armada (Comisión de la Verdad, 2022a, 2022c). Esta lectura abrió el camino hacia un urbanismo contrainsurgente en el que la represión se convirtió en un dispositivo de ordenamiento urbano (Sánchez, 2020). La respuesta se concretó en el Estatuto de Seguridad promulgado en 1978 bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que otorgó amplias facultades a las fuerzas militares para detener sin orden judicial, juzgar civiles en tribunales castrenses y criminalizar sindicatos, asociaciones estudiantiles y movimientos barriales, equiparándolos con la subversión.

La aplicación del Estatuto de Seguridad inauguró una etapa en la que la ciudad comenzó a ser gobernada bajo la lógica del estado de excepción. En Bogotá, los barrios populares se transformaron en escenarios de redadas masivas, allanamientos y detenciones arbitrarias que alteraron profundamente la vida cotidiana (Jiménez, 2009; Leal-Buitrago, 2003). La vigilancia, los retenes militares y las requisas constantes se convirtieron en prácticas habituales, subordinando la planificación urbana a una racionalidad contrainsurgente que producía orden social a través del miedo y la represión.

Las universidades públicas se consolidaron como blancos privilegiados de esta política. Estudiantes, profesores y líderes sindicales fueron detenidos, torturados y procesados en

tribunales militares bajo acusaciones de subversión. En 1978, varios estudiantes de la Universidad Nacional fueron arrestados y sometidos a torturas, lo que ejemplifica el uso del Estatuto como instrumento para anular el disenso político e intelectual (CESYCOME, 2021). La universidad se convirtió así en un nodo central en la cartografía del control securitario, percibida como espacio de incubación de la insurgencia urbana.

En diciembre de 1978, el robo de 7000 armas del Cantón Norte por parte del M-19 intensificó el despliegue represivo estatal y consolidó el Estatuto de Seguridad como un dispositivo permanente de gobierno urbano (Villamizar, 1995). La respuesta estatal combinó redadas masivas y capturas arbitrarias con la expansión de iniciativas paramilitares apoyadas por organismos de inteligencia, como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y por sectores de las fuerzas armadas (Franco, 2009). A comienzos de los años ochenta, estas organizaciones consolidaron una infraestructura destinada a la persecución y tortura de opositores, con centros de detención clandestina en Bogotá como la Escuela de Caballería de Usaquén y otras instalaciones militares (Comisión de la Verdad, 2022b). Entre 1978 y 1982 se registraron más de 1300 casos de tortura en Colombia, casi la mitad en áreas urbanas, con un uso sistemático de la violencia sexual contra mujeres como mecanismo de intimidación y sometimiento (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017b, 2017a).

El auge del paramilitarismo se vinculó estrechamente al narcotráfico. En 1981, tras el secuestro de un familiar de los hermanos Ochoa, los carteles de la droga promovieron la creación de la organización Muerte a Secuestradores (MAS), que pronto se convirtió en una maquinaria de exterminio contra militantes de izquierda, estudiantes y defensores de derechos humanos (Romero, 2000, 2003a, 2003b). Bogotá no fue ajena a este fenómeno: en sus barrios populares aparecieron grupos paramilitares disfrazados de “empresas de seguridad” o campañas de “limpieza social”, responsables de asesinatos selectivos de jóvenes estigmatizados como delincuentes o

simpatizantes insurgentes (Perea, 2015). Esta convergencia entre paramilitarismo y narcotráfico no solo transformó las dinámicas urbanas de la guerra, sino que también moldeó el espacio capitalino, incorporando capitales ilegales en redes clientelares, compra de tierras y proyectos urbanos (Escobar Moyano, 2018, 2021).

La represión estatal y la violencia paramilitar, lejos de debilitar a la insurgencia, incentivaron su reorganización. Durante la Séptima Conferencia de las FARC-EP en 1982 se decidió crear estructuras urbanas como el Frente Urbano Antonio Nariño (FUAN), dedicado al reclutamiento, la propaganda y la acción militar en Bogotá, lo que reflejó un viraje estratégico hacia la ciudad como escenario central de la guerra revolucionaria (CNMH, 2014; Comisión Histórica FARC-EP, 2015). De forma paralela, el EPL y el ELN reactivaron sus redes urbanas, fortaleciendo milicias, reclutamiento y trabajo político en universidades y sindicatos (Beltrán, 2008; Daza, 2016). Bogotá pasó entonces a ser un espacio disputado no solo por el Estado y la insurgencia, sino también por paramilitares y narcotraficantes, configurando un entramado de violencias superpuestas en el corazón político del país.

La primera mitad de los años ochenta abrió una breve ventana de negociación política. Bajo la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986), el Estado ensayó un giro hacia la paz como mecanismo de resolución del conflicto. En 1984, se firmó el Acuerdo de La Uribe entre el gobierno y las FARC-EP, que estableció un cese al fuego y dio origen a la Unión Patriótica (UP), concebida como un puente entre la lucha armada y la política electoral (Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos- REINICIAR, 2006). De manera paralela, el M-19 pactó una tregua y organizó en Bogotá los llamados Campamentos de Paz, instalados en barrios populares de Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar (Medellín, 2018). Estos espacios funcionaron como formas alternativas de soberanía local, en los que se resolvían problemas comunitarios, se ofrecía seguridad y se ensayaban proyectos de autogobierno en zonas periféricas de la ciudad.

No obstante, esta apertura política se frustró rápidamente. La desconfianza mutua, los incumplimientos de los acuerdos y la continuidad de la represión estatal, sumados al auge paramilitar, llevaron al fracaso de las negociaciones. En 1985, el M-19 rompió la tregua y retomó las armas, declarando que el incumplimiento estatal justificaba la confrontación directa (Villamizar, 1995). El episodio más dramático de esta radicalización fue la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 de noviembre de 1985, cuando un comando de aproximadamente 35 guerrilleros buscó someter al presidente Betancur a un “juicio político”.

La respuesta estatal fue desproporcionada: más de 4000 efectivos de la fuerza pública participaron en la retoma, que se prolongó por casi dos días. El saldo fue devastador: más de un centenar de muertos, incluidos magistrados, funcionarios, guerrilleros y civiles, además de decenas de desapariciones forzadas y torturas documentadas como crímenes de lesa humanidad (Comisión de la Verdad, 2022c). Este acontecimiento dejó profundas huellas en la memoria urbana: significó no solo la destrucción física de uno de los símbolos de la justicia, sino también la imposición de un relato estatal que presentó la represión como única salida frente a la insurgencia. Al mismo tiempo, el M-19 perdió gran parte de su legitimidad política, especialmente entre los sectores populares que habían visto en los Campamentos de Paz una alternativa de organización comunitaria.

Mientras tanto, la Unión Patriótica se convirtió en la principal víctima de la convergencia entre paramilitares, narcotraficantes y agentes estatales. Tras su éxito electoral en las elecciones locales de 1986 y 1988, la UP sufrió un exterminio sistemático que ha sido reconocido como genocidio político: miles de sus militantes, concejales, diputados, alcaldes y dirigentes fueron asesinados en todo el país (Carroll, 2015). En Bogotá, la eliminación selectiva de líderes comunitarios vinculados a la UP desarticuló redes sociales en barrios populares, profundizando la vulnerabilidad de las periferias y debilitando los intentos de construir alternativas democráticas.

Este periodo evidenció el carácter estructural de la violencia en la política urbana colombiana. Los intentos de transición democrática fueron sofocados por una alianza de fuerzas estatales, paramilitares y mafiosas que clausuraron cualquier posibilidad de apertura. En la capital, la combinación entre represión militar, exterminio político y violencia insurgente consolidó la idea de que Bogotá no era simplemente un escenario pasivo de la guerra, sino un espacio constitutivo donde se experimentaban formas de gobierno a través de la violencia.

La segunda mitad de los años ochenta estuvo marcada por la intensificación del narcotráfico como actor político y militar en el país. Tras el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y la aprobación del tratado de extradición con Estados Unidos, los carteles de la droga respondieron con una ofensiva urbana sin precedentes. En 1986, se conformó la organización Los Extraditables, liderada por Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder y los hermanos Ochoa, cuyo objetivo era frenar las extradiciones mediante el terror (Romero, 2020). Bogotá, como capital, se convirtió en un escenario clave de esta estrategia: atentados con carros bomba, asesinatos selectivos y amenazas permanentes alteraron la vida urbana, extendiendo un clima de zozobra e incertidumbre cotidiana (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 2006; Pécaut, 2013).

La convergencia entre narcotráfico y paramilitarismo transformó el orden urbano. El narcotráfico no solo consolidó su poder económico mediante el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario y la construcción, sino que también impulsó redes clientelares y penetró instituciones estatales (Cubides, 2005; Echandía, 2013; G. Sánchez, 2021). De la mano de grupos paramilitares, promovió campañas de “limpieza social” que se tradujeron en asesinatos de jóvenes de barrios populares estigmatizados como delincuentes o simpatizantes de la insurgencia (Perea, 2015). Este dispositivo de control social reforzó la espacialización de la violencia en Bogotá, inscribiéndola en las

formas de segregación urbana y en el disciplinamiento cotidiano de la población.

Mientras tanto, la insurgencia buscó repositionarse en el escenario urbano. La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), conformada en 1987 por las principales guerrillas del país, intentó coordinar acciones conjuntas en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali (CNMH, 2014). En particular, las FARC-EP reforzaron la presencia de su Frente Urbano Antonio Nariño, encargado de propaganda, reclutamiento y operativos en universidades y sindicatos. El ELN y el EPL también redoblaron sus esfuerzos en el ámbito urbano, fortaleciendo milicias y redes de apoyo (Daza, 2016). Sin embargo, la presión combinada del Estado, los paramilitares y el narcotráfico limitó su capacidad de expansión, manteniéndolos en la clandestinidad y en acciones de carácter fragmentario.

Durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), el recurso al estado de sitio se convirtió en una práctica habitual. El decreto 0180 de 1988 reinstauró medidas de excepción que permitieron a las fuerzas armadas gobernar amplios sectores de la ciudad bajo una lógica de seguridad nacional (Franco, 2003; Villamizar, 2017). La población bogotana vivió una cotidianidad atravesada por amenazas de bomba, secuestros, desapariciones y masacres, sin claridad sobre los responsables. Esta superposición de violencias fracturó el tejido social y convirtió a la capital en un laboratorio de guerra sucia, donde la legalidad y la ilegalidad se entrelazaban en el ejercicio del poder.

El fracaso de los procesos de paz de los años ochenta y el exterminio de la Unión Patriótica clausuraron la posibilidad de una salida democrática al conflicto. En su lugar, Bogotá se consolidó como un escenario central de la confrontación armada, donde el Estado, las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico disputaban simultáneamente el control territorial y político. Lejos de ser un espacio marginal, la ciudad se constituyó en un epicentro de guerras superpuestas que moldearon su desarrollo urbano y configuraron formas de gobierno sustentadas en la violencia estructural.

En síntesis, entre 1974 y 1991, Bogotá transitó de ser un territorio de insurgencia incipiente a convertirse en un escenario fundamental de la guerra interna. La capital se transformó en un laboratorio de urbanismo contrainsurgente, donde la represión, el paramilitarismo y el narcotráfico interactuaron con la insurgencia para producir orden urbano a través de la violencia. La política, lejos de emanciparse de la guerra, quedó atrapada en un entramado donde las fronteras entre legalidad e ilegalidad se desdibujaron, confirmando que la violencia no fue una anomalía, sino un componente constitutivo de la vida urbana en Colombia.

## 6. A MODO DE CIERRE

El estudio del conflicto armado en Bogotá entre 1948 y 1991 demuestra que la ciudad no fue un espacio marginal ni un escenario secundario de la guerra, sino un actor constitutivo en su desarrollo y prolongación. El análisis histórico permite evidenciar que la capital estuvo atravesada por una forma particular de gobernanza en la que la violencia no apareció como anomalía o ausencia estatal, sino como una mediación estructural en la producción del espacio urbano. Bogotá se consolidó, así, como un verdadero laboratorio de guerra y de ordenamiento territorial, donde la planeación modernista, la informalidad periférica y la represión selectiva se entrelazaron con resistencias comunitarias y movilizaciones sociales.

Uno de los aportes centrales de este trabajo es mostrar que la violencia urbana estuvo marcada por un doble proceso. Por un lado, se configuró una presencia diferenciada del Estado: mientras en las zonas centrales se concentraban las inversiones modernizadoras, en las periferias prevalecían la precariedad y el control coercitivo. Por otro lado, la informalidad urbana, lejos de ser un simple déficit técnico de planeación, se convirtió en un mecanismo de supervivencia y, a la vez, en un escenario de disciplinamiento y estigmatización. Estos procesos configuraron un orden urbano desigual que sirvió tanto para reproducir la exclusión

social como para incubar formas de resistencia y politización.

La investigación también subraya cómo la enajenación de la ciudad en las narrativas dominantes del conflicto —que privilegiaron la dimensión rural— operó como un obstáculo analítico y político. Esta alienación conceptual invisibilizó las violencias intraurbanas y permitió que se consolidara la idea de que la paz sería posible únicamente a través de la desmovilización en el campo. Sin embargo, la evidencia histórica muestra que el conflicto se materializó en fábricas, universidades, barrios y calles de la capital, y que las dinámicas urbanas fueron decisivas en su prolongación. El paramilitarismo urbano, las economías ilegales y la represión policial son solo algunos de los elementos que evidenciaron la centralidad de lo urbano en la trama de la violencia.

A partir de estas constataciones, emergen implicaciones cruciales tanto para la memoria histórica como para las políticas públicas. En el plano de la memoria, resulta indispensable ampliar el relato nacional para incluir a las víctimas urbanas: familias desplazadas a los cinturones de miseria, jóvenes sometidos a prácticas de “limpieza social”, líderes comunitarios silenciados y estudiantes reprimidos en las universidades y en las calles. Reconocer estas experiencias no es solo un acto de justicia simbólica, sino una condición para una reconciliación incluyente y duradera. En el plano de las políticas públicas, la construcción de paz exige transformar las condiciones urbanas que alimentaron la violencia: la segregación espacial, la precariedad de los servicios en las periferias y el uso recurrente de la represión como herramienta de control social. Superar estos legados implica garantizar un acceso equitativo al suelo y a los equipamientos urbanos, invertir en las zonas marginadas y redefinir el papel de las fuerzas de seguridad para que dejen de concebir a la ciudadanía como enemiga interna.

En definitiva, la articulación de las nociones de enajenación de la ciudad y de espacialización de la violencia permite comprender de manera más integral la prolongación del conflicto armado colombiano. Ambas

categorías revelan que la guerra no se desarrolló únicamente en los campos y montañas, sino que se inscribió profundamente en la trama urbana. Por ello, la paz no puede pensarse solo como un proceso rural: debe ser también una tarea urbana. Reconocer a la ciudad como escenario constitutivo de la violencia y, al mismo tiempo, como pilar para la construcción de un orden democrático, justo e incluyente es el primer paso para avanzar hacia una paz completa.

## 7. REFERENCIAS

- Agudelo Colorado, E. D., Garzón Riveros, R. A., Pulido Castro, I. D. y Reinoso Muñoz, J. J. (2015). *La rebelión del alicate: Un estudio de caso sobre la organización Autodefensa Obrera*. Universidad Distrital. Francisco José de Caldas.
- Alape, A. (1980). *Un día de septiembre: testimonios del paro cívico, 1977*. Armadillo.
- Aprile-Gnisset, J. (1992). *La ciudad colombiana. Siglo XIX y siglo XX* (Vol. 2). Banco Popular.
- Archila, M. (1989). *Ni amos ni siervos: Memoria obrera de Bogotá y Medellín (1910-1945)*. Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).
- Archila, M. (1994). Historiografía sobre los movimientos sociales en Colombia. *La historia al final del milenio. Ensayo de historiografía colombiana y latinoamericana*. Universidad Nacional de Colombia.
- Archila, M. (1995). Protestas sociales en Colombia 1946-1958. *Historia Crítica*, 11(1), 63-78.
- Archila, M. (2018). *Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia. 1958-1990*. Siglo de Hombre Editores.
- Archila, M. (2021). *Memorias de la Universidad Nacional en el conflicto armado (1958-2018)*. Universidad Nacional de Colombia.
- Barreto, M. E. (1986). El Frente Nacional. *Historia de Colombia*, 29.
- Beltrán, P. (2008). *De la resistencia al poder popular. Diálogo con el comandante Pablo Beltrán*. Ocean Sur.

- Brenner, N. (2013). Tesis sobre la urbanización. *Nueva Sociedad*, 243, 38-66.
- Brenner, N. (2017). *Neil Brenner. Teoría crítica urbana y políticas de escala*. Icaria-Espacios Críticos.
- Calvo, F. (1985). *EPL, diez hombres, un Ejército, una historia*. ECOE.
- Camargo, A. y Hurtado, A. (2013). Urbanización informal en Bogotá: agentes y lógicas de producción del espacio Urbano. *Revista INVI*, 28(79), 77-107.
- Carrillo, J. (1981). *Los paros cívicos en Colombia*. Oveja Negra.
- Carroll, L. A. (2015). *Democratización violenta. Movimientos sociales, élites y política en Urabá, el Caguán y Arauca. (Colombia), 1984-2008*. Universidad de los Andes. Ediciones Uniandes. <https://doi.org/10.7440/2015.96>
- Castro-Gómez, S. (2009). *Tejidos Oníricos. Movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá (1910-1930)*. Pensar-Universidad Javeriana.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2014). *Guerrilla y Población Civil, Trayectoria de las FARC 1949-2013*. <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/farc/guerrilla-poblacion-civil.pdf>
- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2017a). *La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado*.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2017b). *Medellín: memorias de una guerra urbana*.
- Corporación de estudios sociales y culturales de la memoria (CESYCME). (2021). *Reventando Silencios. Memorias del 16 de mayo 1984 en la Universidad Nacional de Colombia* (1st ed.). Archivos el Búho. Enjambre. Libros Colectivos.
- Comisión de la Verdad (2022a). *Colombia Adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerra*. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Imprenta Nacional de Colombia.
- Comisión de la Verdad (2022b). *Hallazgos y Recomendaciones. Informe final*.
- Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Imprenta Nacional de Colombia.
- Comisión de la Verdad (2022c). *NO MATARÁS. Relato histórico del conflicto armado interno en Colombia*. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Imprenta Nacional de Colombia.
- Comisión Histórica FARC-EP. (2015). *Resistencia de un pueblo en armas*. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 1-80). Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
- Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-REINICIAR (2006). *Historia de un genocidio: El exterminio de la Unión Patriótica en Urabá. El Plan Retorno*. REINICIAR.
- Cubides, F. (2005). *Narcotráfico y Paramilitarismo: ¿Un matrimonio indisoluble?* Universidad Nacional de Colombia.
- Daza, A. (2016). *Guerrilleros en la ciudad y guerrilla urbana: el proyecto insurgente y Medellín*. Universidad Nacional de Colombia.
- De Zubiría, S. (2018). *Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano*. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.
- Delgado, Á. (1978). El paro cívico nacional. *Estudios Marxistas*, 15.
- Echandía, C. (2013). *Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales*. Fundación Ideas Para La Paz (FIP).
- Escobar Moyano, C. A. (2018). *La territorialidad contrainsurgente. Un análisis sobre la configuración territorial del paramilitarismo en el área metropolitana de Bogotá (2009-2016)*. Universidad Nacional de Colombia.
- Escobar Moyano, C. A. (2021). Constantes estructurales de la territorialización paramilitar en el área metropolitana

- en Bogotá (2009-2016). *Ciudades, Estados y Política*, 8. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/article/view/91506/79837>
- Escobar Moyano, C. A. (2024). Espacialización de la violencia como fundamento de la inteligibilidad del Estado. *Revista Ciudades, Estados y Política*, 11(2), 109-133. <https://doi.org/10.15446/rcep.v11n2.115421>
- Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2007). *Ciudad, espacio y población: el proceso de urbanización en Colombia*. Universidad Externado de Colombia. Centro de Investigación sobre la dinámica social.
- Fonseca, L. A. (1982). Los paros cívicos en Colombia. *Desarrollo y Sociedad*, 3.
- Franco, V. L. (2002). El Mercenarismo corporativo y la sociedad contrainsurgente. *Estudios Políticos*, 21, 55-82.
- Franco, V. L. (2003). Violencias, conflictos urbanos y guerra civil: el caso de la ciudad de Medellín en la década de los noventa. *Violencias y Conflictos Urbanos: Un Reto Para Las Políticas Públicas*.
- Franco, V. L. (2009). *Orden contrainsurgente y dominación*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- González Luna, F. (2013). *Espacio y violencia: una mirada a través de la ciudad de México*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Guzmán, G., Fals Borda, O. y Umaña, E. (2005). *La violencia en Colombia*. Taurus.
- Harvey, D. (2013). *Os limites do capital*. Boatepo.
- Hernández, C. (2004). *Las ideas modernas del Plan para Bogotá en 1950. El trabajo de Le Corbusier, Wiener y Sert en Bogotá*. IDCT.
- Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). (2006). *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto armado en Colombia*. Norma.
- Janssen, R. (1984). *Vivienda y luchas populares en Bogotá*. Ediciones Tercer Mundo.
- Jiménez, C. (2009). Aplicación e instrumentalización de la doctrina de seguridad nacional en Colombia (1978-1982): efectos sobre la temática de derechos humanos. *Reflexión Política*, 11(22), 158-174. <https://doi.org/10.29375/01240781.468>
- Lara, P. (2002). *Siembra vientos y recogerás tempestades*. Planeta.
- Leal-Buitrago, F. (2003). La doctrina de seguridad nacional: materialización de la guerra fría en América del Sur. *Revista de Estudios Sociales*, 15, 74-87.
- Lefebvre, H. (2009). *State, Space, World. Selected Essays*. The University of Minnesota Press.
- Lefebvre, H. (2013). *La producción del espacio*. Capitán Swing.
- López, W. (1987). La protesta urbana en Colombia. *Foro*, 3.
- Medellín, I. (2018). *La gente del sancocho nacional: experiencias de la militancia barrial del M-19 en Bogotá, (1974-1990)*. Universidad del Rosario.
- Medina, C. (2020). *Ejército de Liberación Nacional (ELN): historia de las ideas políticas (1958-2018)*. Universidad Nacional de Colombia.
- Medina, M. (1978). La política obrera en el Frente Nacional. *Estudios Marxistas*.
- Mesa, J. (1986). *La Perseverancia, historia y vida cotidiana*. Universidad Nacional de Colombia.
- Mészáros, I. (1973). *La teoría de la enajenación en Marx* (Vol. 1). Ediciones Era.
- Montoya, J. (2018). *De la ciudad hidalga a la metrópoli globalizada. Una historiografía urbana y regional de Bogotá*. Universidad Nacional de Colombia.
- Murcia, C., Chaparro, J., López, W., Jiménez, L. y Jara, S. (2022). *Bogotá hecha a mano. Barrios autoconstruidos, una gesta social y cultural*. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
- Observatorio de Paz y Conflicto (2016). *Organizaciones Guerrilleras en Colombia desde la década de los sesenta*. Universidad Nacional de Colombia.
- Palacios, M. (2003). *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994*. Grupo Editorial Norma.

- Palacios, M. (2012). *Violencia pública en Colombia, 1958–2010*. Fondo de Cultura Económica.
- Palacios, M. y Safford, F. (2005). *Colombia: país fragmentado, sociedad dividida*. Editorial Norma.
- Pécaut, D. (2013). *La experiencia de la violencia: Los desafíos del relato y la memoria*. La Carreta Editorial.
- Perea, C. (2015). *Limpieza social. Una violencia mal nombrada*. Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Pizarro Leongómez, E. (2011). *Las FARC (1949-2011). De guerrilla campesina a máquina de guerra*. Editorial Norma.
- Pizarro Leongómez, E. (2020). La insurgencia armada: raíces y perspectivas. En G. Sánchez Gómez (Ed.), *Pasado y presente de la violencia en Colombia* (pp. 321-339). La Carreta Histórica.
- Pulgarín, S. (1984). *La oposición política durante el Frente Nacional*. Documentos de Sociología Universidad Nacional de Colombia.
- Restrepo, L. (1986). *Colombia. Historia de una traición*. IEPALA.
- Rico, L. (2009). *Ciudad informal*. Universidad de los Andes.
- Rodríguez, Á. (1986). 25 años del primer barrio comunista. *Consigna*, 307.
- Rodríguez, J. (1986). La oposición al Frente Nacional. *Historia de Colombia*, 31.
- Romero, M. (2000). Democratización política y contra reforma paramilitar en Colombia. *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines*, 3(29).
- Romero, M. (2003a). *Paramilitares y auto-defensas (1982-2003)*. IEPRI-Temas de Hoy.
- Romero, M. (2003b). Reform and reaction: The paramilitary groups in Colombia. En D. E. Davis & A. W. Pereira (Eds.), *Irregular armed forces and their role in politics and state formation* (pp. 111–143). Cambridge University Press.
- Romero, M. (2020). Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia; una experiencia para no repetir. En G. Sánchez y R. Peñaranda (Eds.), *Pasado y presente de la violencia en Colombia* (pp. 407-429). La Carreta Histórica.
- Rudas, N. (2019). *La violencia y sus resistencias en la Universidad Nacional de Colombia. Seis décadas de revolución y democracia en el campus*. Universidad Nacional de Colombia.
- Salazar, J. (2018). *Construir la ciudad moderna: superar el subdesarrollo. Enfoques de la planeación urbana en Bogotá (1950-2010)*. Universidad Nacional de Colombia.
- Sánchez, G. (2020). *Memorias, subjetividades y política. Ensayos sobre un país se niega a dejar guerra*. Editorial Planeta.
- Sánchez, G. (2021). *Caminos de guerra, utopías de paz. Colombia 1948-2020*. Editorial Planeta.
- Sánchez, R. (2009). *Huelga. Luchas de la clase trabajadora en Colombia, 1975-1981* (Vol. 1). Universidad Nacional de Colombia.
- Sarmiento, L. y Sánchez, I. (1985). La protesta urbana y el movimiento cívico en Bogotá. *Centro de investigaciones interdisciplinarias*.
- Schachter, S. (2015). Violencia y degradación urbana. *Movimento. Revista de Educação*, 3.
- Scott, J. (2021). *Lo que ve el Estado. Cómo ciertos esquemas para mejorar la condición humana han fracasado*. Fondo de Cultura Económica.
- Serje, M. (2011). *El revés de la nación: Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie*. Universidad de los Andes.
- Smith, N. (2020). *Desarrollo desigual. Naturaleza, capital y la producción del espacio*. Traficante de sueños.
- Swyngedouw, E. (1999). Marxism and Historical-geographical Materialism: A Spectre is Haunting Geography. *Scottish Geographical Journal*, 91-102.
- Tarchópulos, D. (2006). Las huellas del Plan para Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener. *Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, 10 (218), 86.
- Tarchópulos, D. (2010). Le Corbusier y Bogotá: más que un Plan Piloto. *Le Corbusier en Bogotá: 1947-1951: precisiones en torno al Plan Director*. Universidad Nacional de Colombia.

- Torrejano Jiménez, R. (2024). *Geografías de la memoria universitaria: análisis de los lugares de memoria en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá (1977-2006)*. Universidad Nacional de Colombia.
- Torres, A. (2013). *La ciudad en la sombra. Barrios y luchas populares en Bogotá 1950-1977*. Universidad Piloto de Colombia.
- Valenzuela, J. y Vernez, C. (1974). Construcción de vivienda y estructura del mercado de vivienda: El caso de Bogotá. *Revista de Planeación*, 8.
- Vargas, J. (2007). *Historia de Bogotá, Tomo I. Conquista y Colonia*.
- Villamarín, L. (2014). *La selva roja: Nexos del Partido Comunista Colombiano con las Farc*. LAVP.
- Villamizar, D. (1995). *Aquel 19 será. Una historia del M-19, de sus hombres y sus gestas Un relato entre la guerra, la negociación y la paz*. Planeta.
- Villamizar, D. (2017). *Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confines*. Debate.
- Zambrano, F. (2007). *Historia de Bogotá. Tomo III. Siglo XX*.
- Zambrano, F. y Bernard, O. (1993). *Ciudad y territorio. El proceso de poblamiento en Colombia*. Academia de historia de Bogotá. Instituto Francés de Estudios Andinos.

